



Consejo General
del Poder Judicial



Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y EL GOBIERNO DE ARAGÓN EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA CARRERA JUDICIAL DESTINADOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

En Madrid, a fecha de la firma electrónica...

REUNIDOS

De una parte, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, según Acuerdo (nº2) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013, Real Decreto 979/2013, de 10 de diciembre (BOE de 11 de diciembre de 2013), en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Y de otra, la Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, M^a Teresa Pérez Esteban, actuando en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud de lo dispuesto en el Decreto de 5 de agosto de 2019 de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se designa para tal cargo y en el ejercicio de las facultades que le atribuye el Decreto de la misma fecha, publicados ambos en el Boletín Oficial de Aragón nº 153, de 6 de agosto de 2019 por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos, facultada para este acto por acuerdo del Gobierno de Aragón de 12 de noviembre de 2021.

Ambas partes se reconocen con capacidad y legitimación suficiente en derecho para celebrar y firmar el presente Convenio de colaboración, y en su virtud,

EXPONEN

PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Española establece que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo y será presidido por el Presidente del Tribunal Supremo. Asimismo, el artículo 104.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante LOPJ), dispone que el gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional, y su Presidente, de conformidad con el artículo 105 de la propia LOPJ, es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación y gobierno del Poder Judicial.



Consejo General
del Poder Judicial



Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales

Al Consejo General del Poder Judicial, entre sus funciones constitucionales de gobierno del Poder Judicial, ostenta la exclusiva competencia en materia de formación inicial y continuada de Jueces y Magistrados en virtud de lo dispuesto en el artículo 560.1.7ª de la LOPJ, para cuyo ejercicio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 433bis.4 LOPJ puede colaborar con entidades y organismos.

SEGUNDO. A su vez, el Estatuto de Autonomía de La Aragón, aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 9 de junio, en su redacción vigente, aprobada por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, que en sus artículos 63 a 69 regula los aspectos relacionados con la Justicia, correspondiendo a la Comunidad Autónoma, en todo caso, la organización, dotación y gestión de las oficinas jurisdiccionales. De acuerdo con lo previsto en el artículo 69 citado, además de las competencias expresamente previstas por el Estatuto, la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá todas las funciones y facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuya al Gobierno de España con relación a la Administración de Justicia en Aragón.

Mediante el Real Decreto 1702/2007, de 14 de diciembre, fueron traspasados de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón las funciones y los servicios en materia de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

El ejercicio de estas competencias transferidas en materia de Administración de Justicia corresponde al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 6/2020, por el que se aprueba la estructura orgánica de dicho Departamento, y en cuyo artículo 16 se establece que corresponde a la Dirección General de Justicia,

"... Mantener relaciones de comunicación y coordinación con el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia, Tribunales y Juzgados, Fiscalías, Consejos y Colegios de Abogados, Procuradores de los Tribunales, Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles y demás órganos e instituciones, en materias relacionadas con la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón."

TERCERO. La implantación y el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación es uno de los grandes retos que asumió la Administración de Justicia en los comienzos del siglo veintiuno.

Los objetivos de una Justicia transparente, ágil, eficaz y moderna sólo se pueden lograr a través de la incorporación y utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación a la Administración de Justicia.



Consejo General
del Poder Judicial



La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, modificada por Ley 3/2020, de 18 de septiembre es el marco regulador fundamental, teniendo como fin la introducción y el uso generalizado de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, cuya singularidad requiere de un sistema normativo propio distinto del que, en su día, se estableció para el conjunto de la Administración pública.

Con posterioridad, la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, acomete una serie de reformas procesales y fija una fecha concreta para hacer efectiva la implantación de las nuevas tecnologías, estableciendo en la disposición final duodécima, apartado segundo, que, a partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia, órganos y oficinas judiciales y fiscales están obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia en los términos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley 18/2011.

En aplicación de este marco legal, en ejercicio de sus competencias, la Comunidad Autónoma de Aragón ha implantado el Sistema AVANTIUS, Sistema de Gestión de Justicia, que permite la tramitación de los procesos judiciales de una manera completamente electrónica.

Es reseñable igualmente que con fecha 13 de junio de 2019 la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, acordó declarar obligatorio para los jueces y magistrados del territorio correspondiente al Tribunal Superior de Justicia de Aragón la utilización del sistema de gestión procesal AVANTIUS, dando así un respaldo expreso al sistema y a su uso en los procesos judiciales que tengan lugar en Aragón.

Finalmente, por Decreto 223/2019, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, se creó la Sede Judicial Electrónica correspondiente al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. A través de la Sede Judicial Electrónica, las comunicaciones de la Administración de Justicia con las personas físicas y jurídicas podrán realizarse también de forma electrónica, dando así solución a las obligaciones inherentes a las personas jurídicas y al derecho que tienen las personas físicas, que así lo deseen, de comunicarse con la Administración de Justicia de forma electrónica pudiendo, además, entre otros servicios, tener acceso al expediente judicial electrónico, en aquellos casos que la legislación vigente en materia procesal así lo permite.

Conforme lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, los Juzgados y Tribunales y las Fiscalías están obligados a utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones.



Consejo General
del Poder Judicial



Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales

CUARTO. La Justicia se encuentra inmersa en un período de profundos cambios. Ante ella se presentan numerosos desafíos, que han de entenderse como oportunidades de transformación y mejora. Las tecnologías de la información y de la comunicación no van a poder resolver todos los retos actuales, pero sí una gran parte de ellos y pueden aportar un valor esencial y por lo tanto canalizar la transformación que demanda tanto la sociedad como sus profesionales.

El Gobierno de Aragón, que adquirió un compromiso de modernización de la Justicia y de implantación del Expediente Judicial Electrónico con el conjunto de los profesionales que integran e interaccionan con la Administración de Justicia, y también con los ciudadanos de Aragón, decidió abordar la implantación de un nuevo sistema de gestión procesal, avanzado en lo tecnológico, adaptado a las necesidades funcionales reales, con un enfoque integral de todos sus módulos (gestión procesal, Fiscalía, medicina legal y sede electrónica judicial) y con capacidad de interoperar e intercambiar información con otros sistemas de ámbito nacional.

El despliegue del Sistema AVANTIUS comenzó en el año 2018, finalizando su puesta en funcionamiento de forma oficial el día 29 de octubre de 2018.

Una vez finalizado el proceso de implantación del sistema AVANTIUS-ARAGÓN en los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Aragón, anualmente se desarrolla la aplicación mediante la implementación de nuevas mejoras funcionales, por lo que se considera necesario establecer una planificación de acciones de formación dirigidas a los miembros del Poder Judicial con servicio en la Comunidad Autónoma que permita garantizar el conocimiento de todas las prestaciones del sistema por todos los operadores, y que nos permita avanzar hasta la completa transición a la justicia digital mediante la incorporación plena del expediente judicial electrónico a la Administración de Justicia.

QUINTO. En base a lo previsto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Por el Congreso de los Diputados y el Senado aprobaron sendos informes en los que se contienen un conjunto de propuestas para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, y para mejorar en la respuesta que, desde las Instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos menores o a los menores bajo su guarda, tutela o acogimiento. Se trata de un total de 214 medidas en el caso del Congreso y 267 en el caso del Senado a partir de los cuales se desarrolla el **Pacto de Estado contra la Violencia de Género** cuya aprobación



Consejo General
del Poder Judicial



Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales

culminó en diciembre de 2017 con los Acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el resto de Administraciones autonómicas y locales, entidades y organismos intervinientes en el desarrollo del mismo.

Entre las medidas a desarrollar dentro del **Eje 3 del Pacto de Estado contra la violencia de género**, se encuentran las relacionadas con los Protocolos judiciales tanto en relación con las comunicaciones de las órdenes de protección (medida 137), los de los Juzgados con competencia en violencia de género (medida 140) y, en general, todas las referidas a la mayor garantía de la protección a las víctimas en el proceso judicial, considerándose del máximo interés el establecimiento de acciones de formación especializada en la materia para todos los agentes intervinientes, entre los que se encuentran los Jueces y Magistrados.

Ambas partes, conscientes de la necesidad de fomentar entre los miembros de la carrera judicial el conocimiento de cuantas disciplinas jurídicas y otras materias sean precisas para el adecuado desarrollo de las funciones jurisdiccionales con independencia y eficacia, y prestando especial atención a las especialidades derivadas de las propias instituciones públicas y privadas de la Comunidad Autónoma de Aragón, han convenido suscribir el presente convenio en materia de formación que se sujetará a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases generales de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, respectivamente, en orden a la realización de actividades de formación y perfeccionamiento dirigidas con carácter general a los Jueces y Magistrados destinados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Esta cooperación se hará extensiva tanto a la organización de jornadas, seminarios y cursos, como a la realización de investigaciones, estudios y publicaciones que puedan contribuir a la actualización y perfeccionamiento de dichos Jueces y Magistrados. Igual ámbito de formación podrá extenderse a los Juzgados de Paz de los municipios de Aragón, a los Jueces sustitutos y a los Magistrados suplente.

Asimismo, y en atención al contenido de las actividades de formación y perfeccionamiento se posibilitará la asistencia y participación en las mismas de los Letrados adscritos a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.



Consejo General
del Poder Judicial



Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales

SEGUNDA. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de las acciones a desarrollar previstas en el presente convenio es el correspondiente a la Comunidad Autónoma de Aragón.

TERCERA. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN. VIGENCIA Y PRÓRROGA.

El presente convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes mediante su firma y tendrá una vigencia de dos años a partir de su formalización.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, los firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, mediante acuerdo expreso de las partes a través de un documento conjunto o escrito unilateral comunicado recíprocamente.

CUARTA. COMPROMISOS Y ACTIVIDADES OBJETO DEL CONVENIO

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Consejo General del Poder Judicial colaborarán en el diseño, financiación, organización y ejecución de las actividades de formación objeto de este convenio que se realicen en el ámbito de dicha Comunidad.

Ambas instituciones promoverán de común acuerdo cuantas actividades sean convenientes para la formación y perfeccionamiento de Jueces y Magistrados destinados en el territorio de la Comunidad, previa consulta a los mismos y prestando particular atención a las siguientes materias que ambas partes consideran prioritarias:

1. Formación relacionada con la implantación y evolutivos del Sistema de gestión procesal AVANTIUS, Sede electrónica y el resto de aplicaciones del expediente judicial electrónico en Aragón, dando cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión de 13 de junio de 2019, en el que declara obligatorio para los jueces y magistrados del territorio correspondiente al Tribunal Superior de Justicia de Aragón la utilización del sistema de gestión procesal AVANTIUS, y se encomienda a la Administración de la Comunidad Autónoma la elaboración de una propuesta de plan de formación sobre el mismo.
2. Formación sobre las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y, en especial, sobre la tutela de los derechos de las víctimas de Violencia de género, que se diseñará por



Consejo General
del Poder Judicial



Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales

las partes firmantes en el ámbito de Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entre cuyas medidas se incluye, dentro del Eje 3 Justicia, la Medida nº 148, sobre el impulso de las Oficinas de Asistencia a la Víctima de Delito, *"...En tanto punto de acceso o ventanilla única, para la atención a las víctimas y su redirección a los servicios especializados. Potenciar las Oficinas de Asistencia a Víctimas para tutelar los derechos de las víctimas de Violencia de Género, así como fomentar su coordinación a través del Consejo Asesor de las Víctimas recientemente creado, cuya composición ha de revisarse. Establecimiento de un protocolo específico para menores en las Oficinas de Atención a las Víctimas."*

3. Formación sobre asuntos de interés común, en especial, la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Dichas actividades se harán extensivas a los Letrados adscritos a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de La Aragón y a los Jueces y Magistrados de las Comunidades Autónomas limítrofes, en los términos indicados en la cláusula primera.

Sin perjuicio de lo anterior, ambas partes procurarán mantener mecanismos de coordinación a fin de evitar que las actividades formativas y de perfeccionamiento programadas por ambas no incluidas en el marco del presente convenio, entre ellas las incluidas en el Plan General de Formación del Consejo General del Poder Judicial, no se interfieran mutuamente.

Asimismo, las partes firmantes se comprometen a intercambiarse las publicaciones en materia de formación que realicen para conocimiento recíproco y difusión, en su caso, entre los destinatarios de las actividades.

QUINTA. ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA A LOS CURSOS

La asistencia y participación de los jueces y magistrados destinados en Aragón, así como de los letrados de la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, en las actividades de formación y perfeccionamiento incluidas en el ámbito del convenio se acreditará por medio de diplomas o certificaciones expedidas conjuntamente por ambas instituciones.

SEXTA. COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO

Ambas Instituciones firmantes crean una Comisión Mixta de seguimiento formada por dos representantes por cada parte, cuya finalidad será la de impulsar la elaboración de los Planes de Formación y Perfeccionamiento, el control de la ejecución de dichos Planes, así como interpretar el convenio y resolver las dudas que pudieran surgir en su ejecución.



Consejo General
del Poder Judicial



Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales

Por el Consejo General del Poder Judicial formarán parte de dicha Comisión, dos representantes nombrados por el Consejo General del Poder Judicial y por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Aragón, formarán parte de ella el Consejero y el Director General con competencia en materia de Justicia o relaciones con la Administración de Justicia. Estos últimos podrán delegar respectivamente en el Director General y/o funcionarios con categoría orgánica de Jefe de Servicio que expresamente designen.

A título enunciativo dicha Comisión tendrá las siguientes funciones:

- Determinar los planes o programas de formación anuales.
- Realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo de los programas y actividades objeto del convenio ejerciendo las funciones de coordinación entre las instituciones firmantes.
- Conocer la ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos asignados a dichos programas.
- Interpretar el convenio y resolver cuantas dudas pudieran surgir en su ejecución.

SÉPTIMA. COMISIÓN EJECUTIVA

Con objeto de dotar de una mayor agilidad a la ejecución de este convenio se crea una Comisión Ejecutiva, en la que figurarán un representante de cada institución firmante, y cuyas funciones serán:

- a) Efectuar el seguimiento y control de la ejecución de las actividades.
- b) Proponer las modificaciones necesarias en el desarrollo de las actividades inicialmente previstas.
- c) Cuantas les sean delegadas o encomendadas por la Comisión de Seguimiento del convenio.

Las partes acuerdan que la Comisión Ejecutiva la integren un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial y el Director General con competencia en materia de Justicia o relaciones con la Administración de Justicia por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Ambas partes procurarán por todos sus medios llevar a buen fin las actividades de formación y perfeccionamiento de Jueces y Magistrados programadas dentro del convenio manteniendo para ello cuantos contactos sean precisos tanto a nivel de comisión de seguimiento como en su caso, a nivel de comisión ejecutiva.



Consejo General
del Poder Judicial



Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales

OCTAVA. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. IMPACTO ECONÓMICO.

El presente Convenio no conlleva incremento del gasto público y no supondrá contraprestación económica para ninguna de las partes, resultando así del mismo, el coste cero para cada una de las mismas.

Cuando en ejecución del Convenio se acuerde la planificación de las acciones de formación para un ejercicio, con la correspondiente incidencia económica o presupuestaria, éstas se articularán a través de Adendas de este Convenio que estarán sujetas a los preceptivos informes de legalidad y, en su caso, a la previa fiscalización del gasto y de los compromisos económicos que resulten de dicha planificación.

El coste de realización de las actividades convenidas será financiado a partes iguales entre las instituciones firmantes, mediante sus respectivas aportaciones que se determinarán en función de las actividades previstas y disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio plasmadas en los Programas Anuales de Actividades de Formación Continua que, como se ha indicado, revestirán la forma de Adenda a este convenio.

NOVENA. MODIFICACIÓN, RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO.

El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes a través de la suscripción de la correspondiente Adenda modificativa que deberá ser suscrita por las mismas autoridades que el presente Convenio.

Son causas de extinción del presente Convenio las establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y expresamente la denuncia del Convenio cuando se estime que se han producido alteraciones sustanciales en las condiciones suscritas.

En caso de incumplimiento, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de dos meses con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y a las demás partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

En caso de resolución del convenio será de aplicación lo estipulado en su artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La resolución del Convenio no afectará a la finalización de las actividades que estuvieran en ejecución, para las que la Comisión Mixta de Seguimiento establecerá un plazo



Consejo General
del Poder Judicial



Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales

improrrogable de finalización, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

DÉCIMA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO.

El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el presente Convenio no generará indemnización entre las partes.

UNDÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS.

En relación con la seguridad de la información y la protección de datos de carácter personal, las partes asumen las siguientes actuaciones y compromisos:

- a) En el tratamiento de los datos de carácter personal, cada parte será responsable de los tratamientos necesarios para la aplicación del convenio en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD). En el caso del CGPJ el responsable del tratamiento a los efectos del RGPD es la Secretaría General. En el caso del Gobierno de Aragón el responsable del tratamiento a efectos del RGPD es la Dirección General de Justicia del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
- b) Los datos derivados de este Convenio serán de carácter identificativo y financiero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el objeto establecido en el Convenio.
- c) En el caso de que se produzcan incidentes de seguridad que afecten a los tratamientos derivados de este Convenio, las partes se comprometen a informarse mutuamente con la máxima celeridad posible con objeto de identificar si el incidente es susceptible de comunicación a la Autoridad de Control (la Agencia Española de Protección de Datos) y a las personas concernidas, sin sobrepasar el límite de setenta y dos horas, según establece el RGPD en su artículo 33. A su vez, las partes se comprometen a colaborar para resolver el incidente y poner los medios para que no se vuelvan a producir incidentes similares.
- d) Las partes fijarán interlocutores relativos a la seguridad de la información y a la protección de datos personales, que se encargarán de comunicar y coordinar el tratamiento de los posibles incidentes de seguridad que se produzcan.
- e) Los/as titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, cancelación, limitación de tratamiento y oposición en la dirección correspondiente a sus respectivas sedes en cada momento o, en el caso del Consejo General del Poder Judicial, a través del formulario web accesible en:



Consejo General
del Poder Judicial



Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales

<http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Proteccion-de-Datos/Ejercicio-de-derechos--formulario-/>.

Y en el caso del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.

Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así como el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de protección de datos), y demás normativa vigente.

DUODÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD.

Las partes acuerdan tratar confidencialmente todos los datos, la documentación y la información que haya sido suministrada a la otra parte durante la vigencia del presente Convenio. Ambas partes también acuerdan no divulgar esta información a ninguna persona o entidad, exceptuando sus trabajadores, con la condición de que también mantengan la confidencialidad y sólo en la medida en que sea necesario para la correcta ejecución de este Convenio.

El acuerdo de confidencialidad seguirá vigente incluso después de la extinción de este Convenio, sea cual sea la causa de dicha extinción.

Todo ello sin perjuicio del debido cumplimiento, por ambas partes, en atención a su propia naturaleza, de las obligaciones de publicidad y transparencia derivadas de la normativa aplicable, en especial de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

DECIMOTERCERA. NATURALEZA Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por el Capítulo VI del Título Preliminar de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o resolución del contenido del presente Convenio que no hayan sido solucionadas de común acuerdo por las partes en la Comisión Mixta de Seguimiento, se someterán a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con la Ley 28/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.



Consejo General
del Poder Judicial



Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio, de forma electrónica, en el lugar y la fecha arriba indicados.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SUPREMO Y DEL CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Fdo.: Carlos Lesmes Serrano

Fdo.: M^a Teresa Pérez Esteban